

# Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gobierno.—Fortaleza 21

## PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1894

MARTES 30 DE ENERO

Número 13

### PARTE OFICIAL.

#### GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA.

NEGOCIADO 6°

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 787 y con fecha 22 de Diciembre último, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido expedir con esta fecha el Decreto siguiente:—“A propuesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Los Notarios electos para las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, una vez constituidas sus fianzas en la forma y cuantía que determina el Real Decreto de 7 de Mayo de 1885 y el artículo 15 del Reglamento del Notariado de Filipinas de 11 de Abril de 1890, solicitarán del Presidente de la Audiencia territorial respectiva, á disposición de quien habrán de constituir dichas fianzas, la aprobación de las mismas.—Artículo segundo. Si las fianzas se constituyen en fincas se acompañará: Primero. La escritura de hipoteca.—Segundo. Certificación, en relación, de cargas, posterior á la inscripción de aquella.—Tercero. Otra certificación expedida por la Administración de Hacienda de la provincia donde radiquen las fincas en que conste la renta que se haya computado al inmueble hipotecado para el reparto de la contribución territorial.—Artículo tercero. Si las fianzas se han constituido en metálico ó efectos públicos, se acompañará el resguardo del depósito; ó un testimonio formal del mismo, y en su caso la última cotización oficial de la Bolsa.—Los resguardos de los depósitos si se presentan originales, serán devueltos á los interesados quedando copia autorizada en la Secretaría de la Audiencia.—Artículo cuarto. El Presidente de la Audiencia teniendo en cuenta la renta que deberá acreditarse para los efectos del artículo 14 de la Ley del Notariado, examinará los documentos respectivos y dictará providencia, bien aprobando y admitiendo la fianza, ó bien declarando que no ha lugar á ello, expresando en este último caso el defecto de que adolece.—Artículo quinto. La providencia del Presidente se comunicará al interesado y, si fuere favorable, se pondrá también en conocimiento del Ministerio de Ultramar á fin de que pueda expedirse el correspondiente título, cuando lo solicite dicho interesado. Si no fuere favorable, el electo optará entre subsanar las faltas notadas ó apelar para ante el Ministerio.—Artículo sexto. En caso de apelación el Presidente de la Audiencia elevará con su informe todos los antecedentes para la resolución que proceda.—Artículo séptimo.—Los Procuradores dueños ó administradores de oficio enagenado á quienes se expida título profesional por los Gobernadores Generales para ejercer el cargo y los que sean nombrados por el Ministerio de Ultramar para ejercerlo en poblaciones donde existan oficios de dicha clase, provistos de título expedido por quien corresponda, así como los que hayan de ejercer libremente la profesión, una vez constituidas sus fianzas en la forma y cuantía que dispone el párrafo 3º del artículo 487 de la Compilación de 5 de Enero de 1891 solicitarán del Presidente de la respectiva Audiencia territorial la aprobación de dichas fianzas sujetándose en la tramitación á lo dispuesto en los artículos anteriores, para las de los Notarios.—Artículo octavo. Los Presidentes de las Audiencias territoriales de Ul-

tramar darán cuenta á este Ministerio de los acuerdos que adopten sobre materia de fianzas de toda clase de Procuradores.—Artículo noveno. Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan á las consignadas en este Decreto.—Dado en Palacio á veinte y dos de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.—MARIA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, ANTONIO MAURA Y MONTANER.—Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conocimiento y demás efectos.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 11 del actual, de su orden se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 17 de Enero de 1894.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 798 y con fecha 26 de Diciembre último, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General, la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—La Ley de Enjuiciamiento civil de la Península dispone en su artículo 436 párrafo segundo, que donde haya dos ó mas Jueces municipales cada uno conocerá de los asuntos que correspondan á su distrito, conforme á las reglas establecidas en los artículos 62 y 63, cuyo precepto fué aclarado y completado por la Real orden de 22 de Septiembre de 1885 expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia con el fin de evitar que quedase sin cumplimiento este precepto legal.—Pero como quiera que, tanto en las Antillas como en el Archipiélago Filipino, rige la misma Ley que en la Península, con las modificaciones que estimó necesarias la Comisión de Codificación de las provincias de Ultramar, la cual se hizo extensiva á los citados territorios por Reales Decretos de 25 de Septiembre de 1885 y 3 de Febrero de 1888, se hace indispensable llevar á dichos territorios las disposiciones que siendo de utilidad general, aseguren su cumplimiento, evitando por otra parte entorpecimientos en la marcha de la Administración de justicia.—Con objeto, pues, de evitar estos inconvenientes y á fin de que tenga debido cumplimiento el artículo 435 de la Ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto-Rico y el 419 de la de Filipinas; S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se haga extensiva á las provincias de Ultramar la Real orden de 22 de Septiembre de 1885, la cual deberá cumplirse en todas sus partes.—De Real orden y con inclusión de una copia de la que se cita, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 11 del actual, de su orden se publica en la GACETA OFICIAL, así como también la Real orden de 22 de Septiembre de 1885 de referencia para general conocimiento y cumplimiento.

Puerto-Rico, 17 de Enero de 1894.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha.

REAL ORDEN QUE SE CITA.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

Real orden de 22 de Septiembre de 1885.

Íltmo. Sr.:—Al exceptuar la vigente Ley de Enjuiciamiento civil de la formalidad del repartimiento los juicios verbales, los de desahucio y los demás negocios que sean de la competencia de los Jueces municipales, dispone en el párrafo segundo de su artículo 436 que, donde haya dos ó mas de estos funcionarios, cada uno conozca de los asuntos que correspondan á su distrito, conforme á las reglas establecidas en los artículos 62 y 63.—Este precepto de la Ley, á pesar de ser tan claro y terminante, ha quedado sin cumplimiento, y en la actualidad cada Juez municipal conoce de cuantos negocios se le someten, produciéndose con esto desigualdades, quejas y entorpecimientos que la Ley quiso evitar sin duda, y que ceden en menos cabo de sus disposiciones.—La sumisión de las partes como

motivo de competencia prohibida para la primera instancia por el artículo 59 en las poblaciones donde haya dos ó mas Juzgados, es igualmente imposible por lo que á los Jueces municipales se refiere; y como el repartimiento de los negocios, sobre ser contrario á la disposición terminante del artículo 436, traería gravísimos inconvenientes atendida la naturaleza y carácter de los asuntos de que los Jueces municipales conocen, forzoso es para remediar los males que la experiencia ha señalado en la actual abusiva práctica, poner en vigor el precepto de la Ley y recordar su estricta observancia, llevando al conocimiento de cada Juez municipal aquellos asuntos de que la misma Ley quiere que entienda y no otros.—En vista de las precedentes consideraciones, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer lo siguiente: Primero. Los Jueces municipales de poblaciones en que haya mas de uno, entenderán tan solo en los negocios que correspondan á sus respectivos distritos, con sujeción á las reglas establecidas en los artículos 62, 63 y 1562 de la Ley de Enjuiciamiento civil y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 436 de la misma, sin que puedan las partes someterse expresa ni tácitamente para modificar la competencia preceptuada por la Ley.—Los exhortos se cumplimentarán por los Juzgados en cuyos distritos hayan de practicarse las diligencias á que la comisión se refiera.—Segundo. Los Jueces municipales no darán curso á ningún asunto que, conforme á lo prevenido en la disposición precedente, corresponda á otro distrito, ni dictarán en él otra providencia que la de que se remitan las papeletas ó solicitudes al Juzgado competente.—Tercero. La infracción de estos preceptos se corregirá por los Jueces de primera instancia al conocer de las apelaciones, ó por las Salas de justicia al resolver las competencias, imponiendo las correcciones disciplinarias autorizadas por la Ley de Enjuiciamiento civil, ó las costas al Secretario del Juzgado municipal cuando hubiese dejado de consignar en diligencias las circunstancias que determinen la competencia del Juzgado, ó al Juez cuando, estando consignadas, no las hubiere estimado debidamente.—De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento, el de las Salas de Justicia de ese Tribunal, Jueces de primera instancia y municipales del territorio y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid, 22 de Septiembre de 1885.—SILVELA.—Sr. Presidente de la Audiencia territorial.

Es copia.—El Subsecretario, SANCHEZ GUERRA.

Es copia.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 794 y con fecha 16 de Diciembre último, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Con esta fecha se dice á Gobernador General de Cuba la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Visto el expediente instruido con motivo de las dudas y reclamaciones á que ha dado lugar la publicación de los Aranceles judiciales para los negocios civiles, aprobados por Real Decreto de 18 de Julio último.—Y resultando: que los Procuradores de la Audiencia de la Habana solicitan quede en suspenso por lo que á los mismos afecta, la aplicación de los nuevos Aranceles en su Título IV mientras continúe vigente la Real orden de 15 de Abril de 1891, y que, caso de desestimarse esta pretensión, se modifique el artículo 320 de los referidos Aranceles aumentándoles la agencia mensual de doce á quince pesos, para atender á los gastos forzosos de su oficio y á los de su subsistencia.—Resultando: que en otra instancia, solicitan que se declare si deben seguir pagando á los Secretarios de Sala los derechos que les señala el nuevo Arancel, ó si deben reintegrarlos al Tesoro en papel de pagos al Estado, según aquel preceptúa.—Resultando: que el administrador del oficio de Tasador-Repardidor de la referida Audiencia, interesa que se modifiquen los Aranceles en términos mas equitativos para el mismo, por entender que tal como hoy aparecen, lesionan